



Territorios amenazados: resistiendo la embestida extractivista



Plantaciones de Agropalma, Brasil. Foto: Repórter Brasil

Nuestra Opinión: La certificación incentiva la concentración de tierras, la violencia y la destrucción.....	2
El FSC y la RSPO, ¿cómplices del delito? La cuestión de las tierras de Jari Florestal y Agropalma en la Amazonía brasileña	4
Nigeria: las plantaciones de palma aceitera de Okomu solo traen desgracia para las mujeres de la zona.....	10
Las promesas engañosas de Dekel Oil llevan a los aldeanos a firmar peligrosos contratos para el cultivo de palma aceitera en Costa de Marfil	15
Ecuador: pueblos, comunidades y naturaleza frente a la palma aceitera.....	19
Gabón: las plantaciones industriales de palma aceitera de OLAM dejan a la comunidad de Sanga sin acceso a agua potable.....	23
El colapso de la represa Xe Piann-Xe Namnoy en la RDP de Laos: ¿aprenderá la región del Mekong con lo sucedido?.....	27
ALERTAS DE ACCIÓN	31
Nuevo paso hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos.....	31
Justicia ordena a la empresa chilena Arauco a devolver tierra a comunidad mapuche.....	31
Carta del Colectivo de Mujeres afectadas por el monocultivo de palma aceitera de Gabón a la FAO.....	32
Apoyo a la declaración: “La RSPO no elimina la violencia y la destrucción del sector del aceite de palma industrial”.....	32
RECOMENDADOS	32
Un nuevo documental: “La explotación de los bosques primarios: ¿puede el eco-etiquetado frenar la industria forestal?”.....	32
Más cerca de una Declaración de las Naciones Unidas en defensa de los derechos de las y los campesinxs.....	33

Territorios amenazados: resistiendo la embestida extractivista

Nuestra Opinión

La certificación incentiva la concentración de tierras, la violencia y la destrucción



Gabón: Violencia en una plantación de OLAM
Foto: Muyissi Environnement

La RSPO fue creada hace 14 años, y el FSC hace 25. Lo que estos dos esquemas de certificación para plantaciones de árboles tienen en común es que inicialmente generaron muchas expectativas, prometiendo una verdadera transformación: mitigarían los impactos negativos de las plantaciones de monocultivos a gran escala, de tal forma que éstas pudiesen generar un saldo positivo para las comunidades locales, la economía local y el medio ambiente. Sin embargo, después de todos estos años definitivamente podemos concluir que lo que la RSPO y el FSC también tienen en común es que no van a cumplir esas expectativas.

En una carta abierta (que todavía puede [firmarse aquí](#)) a la RSPO (sigla en inglés para Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible) en ocasión de su 16ª asamblea en noviembre de 2018, un grupo de organizaciones alerta que la prometida transformación no ocurrió, sino todo lo contrario. La carta afirma que “La promesa de la RSPO de “transformación” se ha convertido en una poderosa herramienta de maquillaje verde para las empresas de la industria del aceite de palma. La RSPO le da a esta industria - que sigue siendo responsable del acaparamiento violento de tierras, la destrucción del medio ambiente, la contaminación por el uso excesivo de agrotóxicos y la destrucción de los medios de vida de campesinos e indígenas - una imagen “sostenible”.

Casi todos los artículos de esta edición del boletín del WRM hablan sobre plantaciones de árboles, que incluyen a la palma aceitera, y algunos inclusive se enfocan en los sellos de

certificación antes mencionados y el modo en que de hecho benefician a las empresas en detrimento de las comunidades.

El artículo sobre Brasil, por ejemplo, muestra cómo grandes empresas en la Amazonía usan y abusan de los sellos de la RSPO y el FSC (sigla en inglés del Consejo de Manejo Forestal) para legitimar sus prácticas ilegales. En Brasil es recurrente la práctica de los latifundistas de producir títulos de tierras falsos, conocida como grillagem (“grillaje”) de tierras. La RSPO y el FSC elaboraron principios que exigen, para certificar un manejo forestal como responsable, que éste se haga en tierras cuyos títulos hayan sido obtenidos legalmente. Sin embargo, en el caso de la empresa certificada Agropalma, que planta palma aceitera, la RSPO le dio credibilidad a una documentación de tierras que desde hace años es objeto de investigaciones y acciones judiciales interpuestas contra la empresa por las autoridades brasileñas competentes.

También en Brasil, en el caso de la maderera Jari Florestal, certificada por el FSC, el sello dio también credibilidad a una documentación ilegal y ha ignorado acciones judiciales en curso desde 2005. A pesar de que la certificadora propuso, desde el momento en que otorgó el sello a la empresa, un proceso para solucionar los graves conflictos de tierras con las comunidades locales, estos conflictos continúan sin solución hasta el momento. Lo más grave es que todos los años en que disfrutó del sello, de 2004 a 2017, la empresa consiguió ventajas en los mercados internacionales en comparación con la madera no certificada, con lo que se enriqueció aún más. Éste es, en los hechos, el beneficio resultante del FSC.

En otro artículo mostramos cómo en Gabón la empresa palmicultora OLAM, certificada por la RSPO, privó a una comunidad entera de un derecho que se encuentra entre los más esenciales: el acceso al agua potable. Cabe citar también que la empresa recientemente intentó, sin éxito, controlar e interferir en un encuentro de comunidades que querían reunirse sólo con colaboradores para discutir los problemas que enfrentan debido a las plantaciones de OLAM. Las comunidades quieren discutir e intercambiar libremente sobre esos problemas, y de hecho tienen todo el derecho de hacerlo. En el encuentro analizaron que OLAM, al crear comités para discutir supuestos beneficios que implementaría en cada comunidad, en realidad intenta impedir un diálogo colectivo entre todas las comunidades sobre aquello que más las preocupa: la expansión desenfrenada de las plantaciones de palma aceitera en los bosques y tierras de los que las comunidades dependen. Este proceso de expansión está generando un conjunto de impactos negativos que pone en riesgo la supervivencia física y cultural de estas comunidades.

Lo que ocurre en Gabón ocurre también en otros países, como muestran otros artículos de este boletín. Sin embargo tanto la FSC como la RSPO no hacen nada para impedir la expansión de las plantaciones, promovidas a diario por sus miembros. Por el contrario, se muestran connivente con éstas.

¿Qué hacer más allá de la certificación? Las comunidades muestran caminos de esperanza y trazan estrategias de resistencia. En el artículo sobre Nigeria leemos que en el país hay una fuerte cultura de la palma aceitera nativa, que contribuye en forma significativa a la construcción de la identidad cultural y el bienestar económico de millares de comunidades rurales. Sin embargo, éstas también sufren con la expansión de los monocultivos industriales de palma aceitera, promovida por ejemplo por la empresa Okomu, propiedad del grupo Socfin, que es miembro de la RSPO. En una entrevista, una de las mujeres de las comunidades que se enfrentan a la empresa relata la gran violencia que sufren las

comunidades, particularmente las mujeres. Pero no sólo eso. Ella insiste también en contar cómo comenzó la resistencia de parte de las comunidades cuando alguien dijo, hace 15 años, en una situación que parecía ser de total desesperación, “Vamos a dar esta batalla para las generaciones futuras”.

De hecho, lo que está en juego es el futuro. Con la expansión de las plantaciones supuestamente “sustentables” que la RSPO y el FSC promueven en varios países y continentes, la libertad de miles de comunidades de usar sus territorios, así como la capacidad de mantener y fortalecer sus medios de vida están gravemente amenazadas. Para revertir esto es crucial debilitar también los sellos de certificación como el FSC y la RSPO. Quienes tienen influencia sobre los sellos, por ejemplo las industrias que compran aceite de palma y los consumidores finales de los productos con ingredientes certificados, deberían negarse a seguir comprándolos.

Mientras tanto, la resistencia de las comunidades continuará y sin duda aumentará en la medida en que las plantaciones avanzan sobre más tierras y bosques. Nuestro papel es hacer todo lo posible para que el grito de estas comunidades sea cada vez más fuerte.

El FSC y la RSPO, ¿cómplices del delito? La cuestión de las tierras de Jari Florestal y Agropalma en la Amazonía brasileña



Jari Florestal. Foto: Tarcísio Feitosa

El WRM lleva años advirtiendo que en Brasil hay muchas plantaciones de monocultivos certificadas establecidas en tierras cuyos títulos fueron obtenidos en forma fraudulenta. Este artículo trata el caso de dos empresas que operan en la región amazónica: Agropalma y Jari Florestal. Ambas obtuvieron la certificación de sus plantaciones a pesar de haber tenido que declarar ante la Justicia en procesos judiciales por el delito de haber fraguado títulos de tierras. En el caso de Agropalma la certificadora fue la Mesa Redonda sobre Aceite de

Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés), y en el caso de Jari Florestal, el Consejo de Administración Forestal (FSC, por su sigla en inglés) (1).

La historia de Brasil está marcada por expulsiones violentas y masivas de comunidades indígenas, tradicionales y campesinas de sus tierras. Una práctica recurrente de los latifundistas para poder convertirse en “propietarios” de las tierras de estos pueblos es la producción de documentos falsos, que se conoce como grilagem (“grillaje”) de tierras (2). Esta práctica ayudó a que hoy Brasil sea considerado uno de los países con la distribución de tierras más desigual del planeta.

Al otorgar sus sellos, las certificadoras se vuelven cómplices de este proceso de expropiación y violencia, dando un visto de legalidad a la situación de las empresas respecto de las tierras.

El caso de Agropalma

Agropalma es una de las principales empresas de monocultivos de palma aceitera de Brasil. Sus plantaciones llegan a ocupar cerca de 39 mil hectáreas en el estado de Pará. Según su sitio en internet, la empresa posee varios sellos de certificación, “fundamentales para mantener su credibilidad en el mercado” (3). Entre ellos está el de la RSPO, obtenido en 2013 y que abarca toda la superficie plantada de Agropalma (4).

Agropalma también participa de una sociedad llamada Grupo Innovador de la Industria del Aceite de Palma, creada en conjunto con organizaciones no gubernamentales como el WWF, Greenpeace y el Programa por los Pueblos de los Bosques (FPP) “para intensificar y mejorar los principios y criterios de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO)” (5).

Sin embargo, en el estado de Pará la Policía Federal investiga a Agropalma desde el año 2016 por un supuesto plan delictivo. Funcionarios de la empresa habrían producido y utilizado documentos falsos ante organismos públicos para la regularización de las tierras y el posible acceso a recursos de financiamiento público en detrimento de los moradores que allí vivían.

En marzo de 2018 se cumplieron las órdenes de prisión temporal de cuatro personas directamente involucradas en el plan, incluyendo a un funcionario de Agropalma, y de búsqueda y requisita de materiales de la empresa. Según el funcionario responsable de la investigación, “Hay indicios que apuntan a que se trata de un caso de grilagem, (...). La verdadera beneficiaria del plan delictivo es Agropalma”. El funcionario afirmó también que “Ellos iban hasta un estudio notarial en Belén [la capital del estado de Pará], hacían una escritura falsa; toda una cadena falsa que terminaba siempre en la empresa, como si la tierra, después de todas esas ventas, fuera finalmente vendida a la empresa. Después volvían al municipio en cuestión y restauraban libros supuestamente extraviados” (6).

Según la investigación, una resolución del Tribunal de Justicia de Pará autoriza que un libro de escrituras extraviado pueda ser restaurado en caso de que el interesado tenga un indicio documental. Mediante este artificio, Agropalma estaría llevando a cabo esa restauración basándose en documentos falsos, poniendo las tierras a nombre de la empresa y aumentando su superficie. Luego iniciaba el proceso de regularización de tierras en los organismos públicos.

En agosto de 2018 el Ministerio Público del estado de Pará interpuso una Acción Civil Pública donde requiere, entre otras providencias, la nulidad y cancelación de los registros inmobiliarios de dos haciendas, Roda de Fogo y Castanheira, que en conjunto abarcarían más de 9.501 hectáreas, lo que equivale a casi 9.000 canchas de fútbol. Ambas habrían sido adquiridas por Agropalma mediante registros falsos realizados en una notaría ficticia de la ciudad, y estaban tramitándose en el Instituto de Tierras de Pará (Iterpa) (7).

El caso de Jari Florestal

En 1967 el millonario norteamericano Daniel Ludwig pagó tres millones de dólares a la dictadura militar brasileña para controlar nada menos que 1,6 millones de hectáreas de bosques en el norte del país, en una región llamada Vale do Jari, entre los estados de Pará y Amapá.

Su emprendimiento inició una gran deforestación para establecer monocultivos de un árbol exótico de Indonesia llamado Gmelina arbórea con el fin de producir celulosa. Con financiamiento público del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), Ludwig encargó una fábrica de celulosa que le fue traída por mar desde Japón.

El emprendimiento atrajo a miles de personas a la región. El núcleo urbano de Monte Dourado, en el municipio de Almeirim, en Pará, se convirtió en el centro del proyecto. Después de haber plantado 64.000 hectáreas de Gmelina, el emprendimiento se volcó a las plantaciones de pinos, a causa del ataque de hongos, y más tarde al eucalipto. En 1982, debido a que se encontraba en una grave crisis financiera y a las crecientes críticas sobre el apoyo de los militares al empresario extranjero, Ludwig vendió su empresa a un consorcio de 23 empresas brasileñas. La venta se llevó a cabo con dinero público (8).

En el año 2000 el emprendimiento empezó a ser controlado por el grupo ORSA, que en 2003 creó ORSA Florestal para dedicarse a la actividad maderera. En 2004 la entonces ORSA Florestal obtuvo el sello del FSC, a través de la empresa certificadora SCS, para manejo forestal de 545.000 hectáreas. Paralelamente la empresa consiguió también el sello del FSC para las plantaciones de árboles para celulosa (9).

En 2013 el emprendimiento comenzó a llamarse Grupo Jari, en tanto ORSA Florestal se volvió Jari Florestal (10). En 2014 el manejo forestal de la empresa, ahora Jari Florestal, fue re-certificado para una superficie total de 715.665 hectáreas, de las cuales 666.100 son para maderero, con una tasa de recolección prevista de 30 m³/hectárea/año, destinada principalmente a la exportación (11). En su informe de 2014, SCS afirma que “la empresa posee documentación legal de la propiedad de las tierras con alcance de certificación, de fe pública, tanto para las áreas en el estado de Pará como en el estado de Amapá” a nombre de la empresa Jari Celulose, perteneciente al Grupo Jari.

SCS afirma también que “la legitimidad de esa documentación fue verificada a través de consultas a los organismos competentes”. Aun así, SCS admite que en su primera evaluación de certificación en 2003/2004 ya había identificado el problema de la falta de regularización de las tierras de las comunidades que viven en la zona de Jari. En aquel momento SCS solicitó a la empresa que elaborase un plan para la regularización de los moradores con derecho a posesión, pero entre 2004 y 2013 hubo una serie de problemas que dificultaron la ejecución del plan. Afirmando siempre que “la empresa posee la

documentación legal y legítima”, SCS alega que los problemas fueron causados por supuestos “invasores” en las tierras de la empresa y que por eso Jari habría promovido procesos judiciales de reintegración de posesión contra esas personas.

SCS pone a Jari como la víctima del embrollo de tierras. Cuando alega que “Jari Florestal no puede ser culpada, mucho menos castigada, por los aciertos y errores en el pasado del ‘Proyecto Jari’”, está sugiriendo que la empresa no tiene responsabilidad alguna por los problemas de tierras existentes. Y que “si cumple las normas del FSC sí está calificada para tener y mantener la certificación, como ha hecho a lo largo de estos nueve años” (12).

Quizás sea por eso que la SCS ignoró por completo en su informe dos procesos judiciales que ya estaban en ejecución y que contradicen sus afirmaciones sobre la supuesta legalidad de la documentación de las tierras de Jari Florestal.

El primero es una acción de 2005 iniciada por el gobierno del estado de Pará donde se pide que se declare que Jari florestal no es propietaria de las tierras que pretende legitimar ante el Instituto de Tierras de Pará (13). En esa acción, el procurador del estado de Pará cuestiona la supuesta propiedad del grupo Jari sobre el terreno que en el pasado fue la Fazenda Saracura, una estancia con una superficie de 2,6 millones de hectáreas.

Según afirma un estudio histórico, “las circunstancias en las cuales [el supuesto dueño, en torno a 1882] obtuvo esas áreas están rodeadas de relatos de fraudes electorales y en los registros notariales de la región, iniciándose así una complicada situación de tierras que hasta ahora no tiene solución” (14). Por eso, el corregimiento del Tribunal de Justicia del estado de Pará promovió la cancelación de matrículas, transcripciones, registros y notas marginales constantes sobre la Fazenda Saracura, “(...) con el fin de evitar la legitimación de lo que hizo Jari transformando ‘con un pase de magia’ la Fazenda en propiedad”, como afirma el procurador en la acción de 2005.

La segunda acción de 2011 se tramita ante la Justicia Federal de Pará en base a una denuncia del Ministerio Público Federal contra el director del Grupo Jari, quien habría incurrido en el delito de falsedad ideológica en la presentación de títulos de tierras para conseguir autorización para explotar la madera nativa. Este plan de manejo forestal de Grupo Jari se presentó ante el organismo ambiental federal IBAMA en 2001 para conseguir la autorización para comenzar el madereo. El Ministerio Público Federal inició la acción en 2005 a partir de sospechas por parte de IBAMA de fraude en los documentos (15).

La certificación FSC de Jari Florestal está suspendida desde 2017, pero no por la cuestión de tierras (16). La decisión fue tomada por la SCS en base a una auditoría especial realizada en 2015 después de que una operación del IBAMA multó a la empresa con seis millones de reales por irregularidades en el manejo forestal que apuntaban a la comercialización ilegal de la madera. Debido a la falta de cooperación de la empresa en la investigación de la certificadora, SCS decidió suspender el sello. (17)

De acuerdo con noticias de la época publicadas en la prensa, también las “quejas de los trabajadores y (...) violencia contra las comunidades tradicionales” habrían pesado en la decisión (18). En su último informe, disponible en el sitio del FSC, SCS informa que se mantiene la suspensión. Puesto que las irregularidades ocurrieron fuera del área certificada por el FSC, SCS sugiere que corresponde al FSC Internacional decidir si mantiene a Jari Florestal como afiliada o no (19). Hasta el momento, Jari sigue siendo miembro del FSC.

Consideraciones finales

Una táctica de las empresas para camuflar ilegalidades es buscar mecanismos que puedan dar fe de la legalidad de sus prácticas. El FSC y la RSPO parecen encajar en esta lógica. Más aun cuando las certificadoras terminan haciendo un gran favor a la empresa al aceptar como legales sus títulos de tierras mientras ignoran por completo las denuncias de las comunidades y el trabajo de años de investigaciones y acciones judiciales llevadas a cabo por las autoridades competentes. El Ministerio Público del estado de Pará, dejando ver que es consciente de esa táctica, incluyó en la acción legal iniciada contra Agropalma que, considerando las irregularidades, la empresa deberá abstenerse de mostrar en sus piezas publicitarias el Certificado “8-0090-08-100-00” otorgado por la RSPO (20).

En el caso de Jari Florestal, la empresa encontró también en la certificación, en este caso el FSC, una aliada estratégica. El caos ambiental y social generado por el emprendimiento en la región debería de por sí haber evitado que se le otorgase cualquier sello de sustentabilidad que pudiera darle mayor importancia económica y credibilidad en los mercados consumidores de madera. Nada de eso ocurrió. El emprendimiento no solamente consiguió el sello sino que encontró en la certificadora una aliada para “resolver” sus grandes problemas de tierras. Mientras que los problemas quedaron sin solución, la empresa, consiguió vender su madera como certificada en los mercados internacionales entre 2004 y 2015, hasta que la operación del IBAMA desencadenó la suspensión del sello. Incluso así el FSC mantiene a Jari Florestal entre sus afiliados.

Un grupo de varias comunidades tradicionales, prácticamente ignorado por la certificadora del FSC, está empeñado desde hace años, a pesar de las presiones que ha sufrido, en luchar por la recuperación de sus tierras, no como lotes individuales sino como territorios colectivos reconocidos por los organismos oficiales. Buscar la titulación colectiva ha sido la principal estrategia que las comunidades tradicionales de todo el país han encontrado para luchar por la justicia y la reparación de violaciones históricas, para poder resistir el avance a pleno vapor del latifundio en Brasil y garantizar su futura supervivencia, tanto física como sociocultural.

Finalmente hay que agregar que Jari Florestal también está involucrado desde 2010 en un proyecto REDD+, junto con la empresa Biofílica, como otra forma de lucrar. El REDD+ es un mecanismo de pagos por reducción de la deforestación. Convenientemente, la línea de base para el proyecto REDD+ del Grupo Jari fue establecida entre 2000 y 2010, excluyendo así la historia del emprendimiento maderero a gran escala, sin mencionar la degradación forestal de los últimos 15 años ocasionada por la extracción de madera. Jari ya ganó dinero con el proyecto REDD+, vendiendo 200.000 créditos de carbono. Lo que llama la atención es que, también en la esfera del proyecto REDD+, los integrantes de las comunidades hayan presentado la misma reivindicación de regularización de su territorio. No sorprende que también este proyecto resultó en otra certificación para Jari Florestal en 2013, en este caso por el sistema de certificación llamado VCS (Verified Carbon Standard, norma verificada para el carbono) para proyectos del tipo REDD+ (21). Según la base de datos del programa VCS, esta certificación sigue estando válida (22).

Winnie Overbeek

Secretariado Internacional del WRM

- (1) Para más información, véase: <https://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/plantaciones-de-arboles/certificacion-3/>
- (2) La práctica conocida como grilagem de tierras tiene como objetivo transferir tierras públicas para el dominio privado utilizando documentos públicos de posesión o propiedad falsificados (TRECCANI, 2001); esa acción implica un conjunto de delitos asociados como malversación de fondos, asociación para delinquir, malas prácticas administrativas y enriquecimiento ilícito. En la mayoría de los casos esta práctica está asociada con actos de violencia, pues las tierras en cuestión están ocupadas por pueblos y comunidades tradicionales o agricultores familiares (SIDALC, BDAGBAMB), que son expulsados por orden judicial o por milicias armadas. (TRECCANI, Girolamo Domenico. Violência e grilagem: instrumentos de aquisição da propriedade da terra no Pará. UFPA, ITERPA, 2001; y SIDALC, BDAGBAMB. O livro branco da grilagem de terras no Brasil. P. imprenta: Brasília, DF (Brasil). nd. 41 p.)
- (3) www.agropalma.com.br
- (4) <https://rspo.secure.force.com/membership/servlet/servlet.FileDownload?retURL=%2Fmembership%2Fapex%2FRSPOCertSearch&file=00P9000001KQ4JEEA1>
- (5) <https://wrm.org.uy/pt/artigos-do-boletim-do-wrm/secao1/brasil-discurso-da-inovacao-contrasta-com-a-realidade-da-vida-em-condicoes-analogas-a-escravidao-de-trabalhadores-empregados-por-um-dos-fornecedores-da-agropalma/>
- (6) <https://g1.globo.com/pa/para/noticia/operacao-da-pf-investiga-fraudes-em-documentos-de-regularizacao-fundiaria-no-para.ghtml>
- (7) <https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/index.php?action=Noticia.show&id=1697&oOrgao=94>
- (8) https://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2013/04/Pulping_the_South.pdf y <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/projeto-jari>
- (9) http://www.inesgodinho.com.br/pdfs/RS_Orsa_2010.pdf
- (10) El Grupo Jari se compone además de Jari Celulose, que maneja las plantaciones para celulosa, en su mayoría de eucaliptos, Ouro Verde Amazônia, enfocada en productos no madereros, y la Fundação Jari, que realiza proyectos sociales en las comunidades para “mitigar los impactos negativos de la empresa”. <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/projeto-jari>
- (11) <https://br.fsc.org/preview.fmpubjariflorestal071614port.a-611.pdf>
- (12) Ibid
- (13) Acción declaratoria de inexistencia de dominio e imposibilidad de reconocimiento de dominio fuera de la vía administrativa, con pedido de medida provisoria. Belén, 21/09/2005. Ibraím José das Mercês Roch, procurador del Estado de Pará, coordinador de la Procuraduría de Tierras (Procuradoria Fundiária), distribuida en conexión con el proceso 2004100356-1
- (14) FOLHES, Ricardo; CAMARGO, Maria Luiza. LATIFÚNDIO. Conflito e desenvolvimento no Vale do Jari: do aviamento ao capitalismo verde. Agrária (São Paulo. Online), n. 18, p. 114-140, 2013.
- (15) Investigación Policial (Policía Federal de Santarém: Número: 192/2004-DPF/SNM/PA) y Proceso en el Tribunal Federal de Santarém (Vara Federal de Santarém: No. 423-06.2012.4.01.3902).
- (16) <https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sV5xAAE&type=certificate>
- (17) <http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000evgxOEAQ>
- (18) <https://www.celuloseonline.com.br/fsc-suspense-certificacao-da-jari/>
- (19) <http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000evgxTEAQ>
- (20) <https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/index.php?action=Noticia.show&id=1697&oOrgao=94>
- (21) <https://redd-monitor.org/2015/12/17/the-jari-amapa-redd-project-brazil-greenwashing-illegal-logging-a-pulp-mill-and-a-48-year-old-land-grab/>
- (22) https://www.vcsprojectdatabase.org/#/projects/st_/c_BR/ss_0/so_/di_/np_

Nigeria: las plantaciones de palma aceitera de Okomu solo traen desgracia para las mujeres de la zona



Foto: ERA/FoE

El cultivo de palma aceitera es parte de la forma de vida - de hecho, es la cultura - de millones de personas en Nigeria y otros países vecinos. Los árboles de palma aceitera crecen de manera natural en esta región, por lo que existe una larga historia de uso tradicional, no solo del aceite de palma sino de todas las otras partes de la palmera. En un dialecto regional, a la palma aceitera se la conoce como “*Osisi na ami ego*” (el árbol que produce dinero). (1) Pero en Nigeria, al igual que en otros lugares, esta fuente vital de identidad cultural y bienestar económico para las comunidades rurales se ve amenazada por la expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera.

En esta entrevista, Hajaratu Abdullahi, de Community Forest Watch (Observatorio de Bosques Comunitarios), cuenta cómo la compañía de aceite de palma Okomu Oil causa dificultades y es sinónimo de desgracia para comunidades como la suya en el estado de Edo de Nigeria. Asimismo, relata cómo la plantación industrial de la empresa pone en riesgo el uso tradicional de la palma aceitera así como la soberanía alimentaria de las comunidades.

La empresa Okomu Oil Palm Company fue fundada en 1976 inicialmente como una empresa estatal, pero la empresa internacional SOCFIN, registrada en Luxemburgo, posee ahora el 63 por ciento de las acciones. En 1998 se destruyeron por la fuerza al menos cuatro aldeas, y sus habitantes fueron desalojados. La empresa se apoderó de sus casas, pertenencias y tierras de cultivo. Las tensiones entre la compañía y las comunidades afectadas aumentaron y la compañía instaló portones en los caminos de entrada a las plantaciones. Los miembros de las comunidades se sienten acosados y sus movimientos se han visto restringidos, en particular porque la empresa impuso un toque de queda nocturno y comenzó a controlar la entrada de activistas comunitarios considerados “alborotadores”.

“Salir de la aldea o volver a casa es como cruzar una frontera”, explicó en 2015 uno de los activistas comunitarios. En 2015, el gobierno del estado de Edo ordenó la revocación de los acuerdos territoriales, que incluían unas 13.750 hectáreas para la expansión de las plantaciones de palma aceitera de Okomu, una orden que la empresa ignoró hasta el día de hoy. En junio de 2017, a pesar de varios intentos de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad, comunidades, campesinos, mujeres y grupos de la sociedad civil, como ERA / Amigos de la Tierra Nigeria, afectados por la palma aceitera, organizaron una protesta contra la complicidad del actual gobernador del estado de Edo, Obaseki, con las actividades de Okomu.

WRM: ¿Cuáles han sido los cambios en la vida de las mujeres desde que las plantaciones de palma aceitera de Okomu llegaron a la zona?

Hajratu Abdullahi: Desde que Okomu llegó a mi comunidad las mujeres hemos sufrido mucho porque hemos perdido libertad. En primer lugar: ya no somos libres de ir y venir [porque la compañía controla el acceso a las aldeas dentro de la plantación a través de una serie de portones donde los guardias de seguridad de la compañía revisan y registran todo el tráfico que pasa]. En segundo lugar: pueden entrar a nuestros predios sin avisar y destruir todo lo que plantamos, las palmeras, los cultivos.

Hace algunos años la compañía entró en cuatro comunidades al mismo tiempo; saquearon todo, todos corrían para todos lados. No había nadie a quien pudiéramos pedir ayuda. Las personas que se supone que deberían estar allí para ayudarnos, no estaban, tal vez se habían ido con el dinero. Hubo una sola persona que llamó a algunos jóvenes, a algunos hombres, y dijo “Peleemos para ser referencia para las generaciones futuras”. Y fue así como comenzó la resistencia comunitaria, como comenzó esta lucha contra Okomu. De eso hace más de 15 años.

Y tenemos que seguir movilizándonos porque seguimos sufriendo. Ahora, con estas plantaciones de la compañía por todas partes, no somos libres de entrar a nuestros bosques, a nuestras zonas de cultivos, a las reservas de bosques, a las zonas que utilizamos para recolectar caracoles. Sobrevivimos con los caracoles, sobrevivimos con los vegetales. Ahora ya no tenemos acceso a todas estas cosas, pero son las que nos dan el sustento.

En segundo lugar, usted sabe, en Nigeria las mujeres dependemos de las hierbas tradicionales. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, ya al mes de embarazo se le dan ciertas hierbas; luego, durante todo el embarazo, se le dan otras hierbas diferentes. Entre los dos y los cuatro meses usamos una hierba diferente nuevamente. Y así sigue. Cuando llega a los ocho meses hay una hierba en particular que las mujeres embarazadas reciben, para que la placenta continúe fijada al bebé, para que no haya sangrado. Pero ahora, con las plantaciones de la compañía, no se encuentran todas estas hierbas. Caminamos, caminamos y caminamos en busca de hierbas. Ya no es posible obtenerlas. No te puedes imaginar el problema que esto ha traído a las mujeres. Son las plantaciones las que nos hacen sufrir. Porque antes, aún si no quedaba nada en la casa, la mujer sabía cómo cuidar a su familia, porque tenía su zona de cultivo y el bosque. Pero desde que Okomu entró en nuestras comunidades, en nuestro estado, en el país, ha habido verdaderos problemas. Tenemos hambre porque no hay nada con lo que sobrevivir, porque no se puede recoger siquiera más de ocho semillas de fruta de palma. Si lo haces, te persiguen.

WRM: ¿Qué pasa cuando recolectas más semillas de fruta de palma?

Hajratu Abdullahi: ¡Te arrestan! ¿Y quién vendrá por ti, quién vendrá a sacarte? Una vez, Okomu vino y rompió un puente que habíamos construido para la comunidad. ¡Vinieron y lo rompieron! Uno de los jefes de la comunidad dijo: “¿Cómo pueden venir y romper el puente que construimos? Deben reemplazarlo.” Nunca reemplazaron nuestro puente. Las mujeres usábamos el puente para ir a los diferentes lugares en donde obtenemos nuestros vegetales y otras cosas que nos alimentan. ¿Cómo podremos ir allí ahora que el puente no está más?

Otro ejemplo. Hace aproximadamente uno o dos años, un grupo de mujeres fue y puso trampas en el río, para poder pescar algo. Pero el gerente general de Okomu se llevó las trampas. Hasta hoy no las han devuelto. Poner trampas, pescar, cultivar, esas son las cosas que hacíamos para ganar dinero. Y reemplazar esas trampas cuesta mucho dinero. Son cosas que hicimos para cuidar a la familia. Si no ganas dinero no puedes cuidar a tu familia, no puedes enviar a tus hijos a la escuela. Muchos de nuestros hijos están en casa ahora porque no hay dinero para que sigan estudiando.

WRM: ¿Y qué hay de los trabajos que la empresa ofrece a las mujeres de las aldeas?

Hajratu Abdullahi: ¡No hay ninguno! Y no hay compensación. Aun cuando en otras comunidades están haciendo una o dos cosas como compensación, en la comunidad de Okomu, la comunidad nunca aceptó nada. Tenemos soldados en nuestras comunidades.

No tenemos libertad de movimiento. En algún momento de abril de 2018, cuando un activista comunitario de Camerún vino a compartir sus experiencias con nosotros, dijo: “Déjenme ir y visitar estas comunidades”. Una de las comunidades que queríamos visitar era la de Okomu. Llegamos un sábado. Para llegar a las comunidades dentro de la plantación es necesario pasar por los portones de la compañía. [Ver también el [Boletín 199 del WRM](#), febrero 2014] Cuando llegamos a los portones debimos firmar para poder entrar a la plantación. Luego, la gente de la compañía miró nuestro vehículo y dijo “No tiene calcomanía en su vehículo. Si no tiene una calcomanía, no puede entrar”. “Bien, ¿de dónde sacamos esa calcomanía?”, le pregunté. “La oficina está por allí”, dijeron, y yo dije “Bien, entremos”. “No, no, no, no pueden ir hoy. Vuelvan el lunes”. ¿Así que teníamos que esperar hasta el lunes para ir a ver a nuestra familia?

En ese momento dijimos que eso era imposible. Que si querían arrestarme o matarme, que lo hicieran. Si no tenía libertad para ir a mi comunidad, ver a mi hermana, a mis hermanos, había un gran problema. Por fin, un oficial salió y preguntó qué estaba pasando. Explicamos, y solo porque insistimos, al final nos dejaron entrar. Éste es el tipo de control que las comunidades dentro de las plantaciones enfrentan cada vez que tienen que pasar por esos portones.

WRM: ¿Puedes decir algo sobre el tipo de conflictos e impactos que sufren las comunidades afectadas por las plantaciones de Okomu?

Hajratu Abdullahi: También hay una comunidad muy cercana a la nuestra. Antes, en la temporada del mango, solía haber muchos mangos, y todos los recolectábamos, los llevábamos al mercado, junto con otras frutas como la pera de mantequilla y otras por el estilo. Pero ahora los mangos son tan pocos... Y entonces, imagínate, los hombres y las

mujeres comenzaron a discutir: “Fui yo quien lo recogió”, “¡No! es mío, no tuyo”. Y así ocurre ahora.

Hay otra comunidad donde las plantaciones acaban de entrar. En esa comunidad, muchas mujeres se dedican a la agricultura. Una mujer tenía una gran plantación de cocos. El gerente de Okomu Oil junto con el ejército de Nigeria y la policía que brinda seguridad a la compañía entraron a su plantación- y ése fue el final de su plantación de cocos. Ella solía ir al mercado todas las semanas y vender sus productos. ¡Ahora nada! Su hija recolecta mercancías pequeñas para vender, cocina arroz, cosas así. Se suponía que a esta altura debía graduarse, pero tuvo que abandonar la escuela.

En otra aldea, Odigi, cuando llegó la gente de la empresa quizás sedujeron a los jefes tradicionales, porque ellos les entregaron sus predios. Y ahora esas personas solo tienen menos de media hectárea para cultivar - 0,4 hectáreas- , eso es todo. Y si fueran a la comunidad vecina, esta les dirá “No agarren nuestra tierra. Ustedes regalaron la suya. Nuestra tierra ya no es suficiente”. De esta manera comienza un conflicto entre las comunidades, incluso asesinatos - uno de esos casos está ahora ante los tribunales. Como puede ver, estos son los tipos de problemas que enfrentan las comunidades cuando estas plantaciones se apoderan de su tierra.

Otro ejemplo. Las mujeres solían cultivar plátanos en sus granjas. Con la venta en el mercado del plátano, las mujeres pueden obtener al menos entre 30 y 40 mil Nairas [alrededor de US 90 y 100 dólares]. Entonces, ¿qué sucede cuando se da la tierra a la empresa de plantaciones? ¿Cuánto me pagarás? ¿Debo comer la comida de hoy y olvidarme de mañana? Entonces no tendré tierra para plantar para dar de comer a mis hijos. ¿Qué pasará cuando ya no estemos? ¿Cómo sobrevivirán nuestros hijos? Incluso la pimienta, pimienta común, en esta época del año cuesta entre 8 y 12 mil Nairas en el mercado, pero no puedes llevar nada al mercado si no tienes tierra para cultivar. ¡Ni siquiera tenemos tierra suficiente para cultivar pimienta común! Y si no proteges el pequeño lugar que tienes al lado de tu casa, otra persona lo tomará.

Se ven también a algunas ancianas sufriendo, no tienen nada. Así que comenzamos a buscar leña, caminamos hasta muy lejos para obtener leña para vender, para que tengan algo para sobrevivir. Puedo dar muchos más ejemplos como éste. Estos son solo algunos de los problemas que enfrentamos. No tenemos libertad.

WRM: ¿Qué pasa con la violencia que la compañía dirige directamente a las mujeres?

Hajratu Abdullahi: Ni siquiera saben si existen mujeres. No saben si existen mujeres, con protestas o sin protestas. Si hacemos una protesta hoy, mañana sacarán a su propia gente, sacarán su propia historia en los medios. Dirán: “Hay alguien más a quien queremos hacerle preguntas”, y la persona dirá “Okomu nos beneficia, Okomu nos está dando esto, nos está dando lo otro”. Esta interferencia de Okomu causa muchos conflictos dentro de la comunidad. Por eso les dije que vivieran el presente con sabiduría. Porque el ayer se fue. El hoy: vívanlo con sabiduría. El mañana: no saben si llegará o no. Quizás ayer vendiste tus derechos, pero hoy ¡no vendas tus derechos! Porque ahora hemos abierto los ojos. Aquellos a quienes se supone debes reclamar - el gobierno - son nuestro problema. Harás lo que estás haciendo en tu comunidad, pero el gobierno está haciendo lo que está haciendo por encima de tu cabeza. Entonces, ¿puedo luchar sola contra el gobierno? ¡No!

WRM: ¿Cómo pudo Okumu obtener tierras comunitarias?

Hajratu Abdullahi: Nada compensa la angustia que estas compañías causan entre las mujeres. La compañía invitará a los ancianos, a los hombres más viejos de la comunidad, a una reunión. Cuando vayan, la gente de la compañía dirá “Baba, ven, ven, ven. Simplemente firma este papel”. Un anciano dijo “¿Cómo voy a firmar? Ni siquiera puedo leer, ¿cómo puedo firmar? Porque si voy a firmarlo, entonces primero tengo que leerlo. Así que no estoy listo para firmarlo, porque mi comunidad no está al tanto de esto. Esta invitación - ustedes me están invitando a venir y ¿firmar qué?” Luego llamaron al Secretario “Secretario, firme”. Afortunadamente, el Secretario también dijo: “¿Qué quieren decir? ¿Que venga y firme? ¿Está enterada la comunidad para qué nos invitaron ustedes aquí?” Ellos los apartaron.

Entonces invitaron a un grupo diferente, a solo dos personas. Y ellas dijeron: “No les hagan caso a los otros, son unos tontos. Yo firmaré”. Una mujer de ese pueblo me llamó y me dijo: “Mira lo que estas personas le están haciendo a nuestra comunidad. Alguien ha ido a firmar un acuerdo con la compañía”. Le dije que convocara a una reunión de inmediato para informar a la comunidad. La comunidad se reunió y dijo que no apoyaba el acuerdo que esas personas habían firmado. Quedó documentado, así que los que firmaron lo hicieron por su cuenta.

WRM: Supimos que en otros lugares, por ejemplo en Sierra Leona, hay un aumento de la violencia sexual que las mujeres sufren directamente por parte de los guardias de la compañía o de los trabajadores de la empresa. ¿Es lo mismo en el caso de Okumu en Nigeria? Sabemos que es un tema muy difícil, y que a veces las mujeres ni siquiera lo dicen ...

Hajratu Abdullahi: Incluso si les ocurriera a muchas de ellas, ninguna lo diría. En nuestra tradición, si una mujer casada es vista hablando incluso cosas mínimas con un hombre, estará en problemas. No es lo mismo en todas las comunidades. Pero en mi zona, si estás casada no puedes mantener conversaciones aunque sean insignificantes con un hombre. Entonces, en esa realidad, aunque a una mujer le esté pasando algo, ella no hablará. También hay tantos casos en que aunque quieras plantearlo ante la policía, no verás ni el principio ni el final del caso. Así que ésta es la razón por la que ves que hay gente que, cuando tiene un cierto problema, se lo calla. Ése es el problema. No es que no suceda. Sucede. Pero cuando ocurre, las mujeres lo ocultan.

WRM: Cuando eras niña, ¿cómo era la comunidad?

Hajratu Abdullahi: Muy diferente. Cuando era una niña pequeña, a la edad de 12 años, podías bañarte desnuda, jugar cuando llovía, pasear por todos lados.

WRM: ¿Y cómo era el lugar?

Hajratu Abdullahi: La temperatura era agradable y fresca. Íbamos a la plantación de cocos y nos llevábamos algunos. Regresábamos a casa y podíamos decir “Ah, ¡mami!, esto es lo que quiero comer”. Y si una quería algo que en casa no había, podía ir al bosque y al campo de atrás y elegir lo que necesitaba. En el camino, podía recoger algunos caracoles, arrancar hojas, como hojas de coco; las molíamos y teníamos una manera de convertir eso en sopa. Incluso podía comer maní sin siquiera ponerlo en el fuego - conseguía el maní, lo

molía, le agregaba un poco de pimienta, sal, hacía lo que se llama Sopa de cacao. La comida abundaba. Pero hoy en día... hoy en día ya no es así.

(1) Ver Boletín 161 del WRM (2010): Palma aceitera en Nigeria: la producción en masa desplaza a pequeños productores y mujeres. <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion2/palma-aceitera-en-nigeria-la-produccion-en-masa-desplaza-a-pequenos-productores-y-mujeres/>

Ver también:

Boletín 233 del WRM (2017): Las plantaciones de SOCFIN en África: muchas zonas de violencia y destrucción. <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/las-plantaciones-de-socfin-en-africa-muchas-zonas-de-violencia-y-destruccion/>

Boletín 199 del WRM (2014): Nigeria : Okomu Oil Palm – Destrucción de comunidades para expansión de la palma aceitera. <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/nigeria-okomu-oil-palm-destruccion-de-comunidades-para-expansion-de-la-palma-aceitera/>

Las promesas engañosas de Dekel Oil llevan a los aldeanos a firmar peligrosos contratos para el cultivo de palma aceitera en Costa de Marfil



Costa de Marfil.

Los propietarios de tierras en Costa de Marfil se encuentran atrapados en contratos con la empresa Dekel Oil, la que, con promesas engañosas, les ha dejado creer que se volverían ricos firmando los contratos que autorizan a Dekel Oil a establecer sus monocultivos de palma aceitera. Los aldeanos luchan para rescindir los contratos y han comenzado a alertar a los demás aldeanos sobre los riesgos que la firma de tales contratos conlleva.

Cuando las empresas de plantaciones de palma aceitera necesitan mostrar que las comunidades apoyan sus planes de establecer plantaciones industriales en tierras comunitarias, estas utilizan tácticas sofisticadas para dar la impresión de que las comunidades o los propietarios individuales aceptan las plantaciones de la empresa. Esto es

especialmente cierto cuando los planes de la empresa son cultivar palma aceitera en tierras que no están controladas por el Estado sino que pertenecen a comunidades o individuos.

Una de esas tácticas consiste en hacer promesas que a los integrantes de la comunidad o los propietarios individuales les cueste rechazar. Por ejemplo, los representantes de la empresa pueden prometer que construirán escuelas y policlínicas, mantendrán las rutas, brindarán generadores diesel, etc. para las comunidades, si es que éstas ceden sus tierras para permitirle a la empresa cultivar la palma aceitera. La empresa también puede argumentar que las plantaciones solo ocuparán una pequeña parte de la tierra, cuando, en realidad, la mayor parte de la tierra comunitaria termina en manos de la empresa y sus plantaciones.

Cuando las empresas intentan atraer a un propietario de tierras, a menudo alegan que al adherirse a su programa de producción de palma aceitera, el propietario se volverá muy rico. Los aldeanos son blanco de mentiras y promesas engañosas y se los tienta a firmar contratos que los encarcelan en compromisos a largo plazo con la empresa.

Pero una vez que el contrato es firmado o que la empresa puede pretender tener el apoyo de la comunidad, las promesas son olvidadas. No importa qué tan sinceras parecen ser y la convicción con las que se prometen en un inicio, las empresas las ignorarán una vez obtenido aquello que desean: controlar las tierras de la comunidad o de los campesinos individuales.

Utilizando estas promesas falsas, las empresas obtienen el control sobre cientos, o incluso miles, de hectáreas de tierras.

El caso de Dekel Oil en Costa de Marfil constituye un claro ejemplo. Los propietarios de tierras se encuentran atrapados en contratos con la empresa, la cual le prometió a los agricultores que se volverían “muy ricos” si firmaban contratos para producir aceite de palma para Dekel Oil. Lejos de enriquecerse, ahora están librando una batalla jurídica para obtener la anulación de los contratos y garantizar que no están en riesgo de perder la totalidad de sus tierras en beneficio de la empresa.

Dekel Oil es una sociedad agroindustrial basada en Costa de Marfil que produce aceite de palma destinado a la exportación y que comenzó sus actividades en 2007. Dekel Oil fue creado por el grupo Siva y un conglomerado israelí (1). El grupo Siva, que está registrado en Bélgica y pertenece al millonario indio Sivasankaran, está implicado en el acaparamiento de millones de hectáreas de tierras en el mundo.

En la región de Aboisso, en el este de Costa de Marfil, Dekel Oil ha asumido el control de más de 28.000 hectáreas de tierras alrededor de la aldea de Ayenouan, que la empresa utiliza ahora para plantaciones industriales de palma aceitera. De esta superficie, sólo 1.886 hectáreas están cubiertas con plantaciones de palma, en tierras que la empresa controla directamente mediante el arrendamiento. La gran mayoría de las plantaciones industriales están establecidas en tierras pertenecientes a familias que firmaron contratos como pequeños agricultores con Dekel Oil.

En 2015 la empresa recibió un préstamo del Banco Mundial para continuar su expansión y pasar a controlar otras 10.000 hectáreas de tierras destinadas a plantaciones industriales de palma aceitera en la región de Ayanouan (2).

Asimismo, para la planta de procesamiento que instaló en 2014, la empresa también se benefició de un financiamiento del BOAD (Banco de Desarrollo del África Occidental) y el BIDC (Banco de Desarrollo de la CEDEAO - Comunidad Económica de Estados de África Occidental) (3).

Dekel Oil comienza también a tomar el control de tierras para sus plantaciones industriales de palma aceitera en la región de Guitry, en el sur de Costa de Marfil, así como en el país vecino, Ghana. La empresa afirma haber obtenido “derechos” sobre 24.000 hectáreas de tierras en Guitry.

La experiencia vivida por los aldeanos de Ayenouan

Entre 2010 y 2011, personal técnico de Dekel Oil comenzó a presentarse en las aldeas de la región de Aboisso y a incitar a los propietarios a firmar contratos con la empresa. Se proponían dos tipos de contrato:

- Una opción de contrato establecía que el propietario entregaba el control de sus tierras a Dekel Oil para que la empresa pudiese establecer plantaciones industriales de palma aceitera en el marco de un acuerdo llamado de co-gestión: el establecimiento, la gestión y la cosecha de las plantaciones se harían entre el propietario y Dekel Oil. Un tercio de los beneficios serían para cubrir los costos de mantenimiento de Dekel Oil, un tercio se consideraría como beneficio para Dekel Oil, y el propietario recibiría también un tercio como beneficio.
- La otra opción de contrato suponía un arrendamiento de la tierra a largo plazo: Dekel Oil pagaría 2,6 euros (25.000 FCFA) por hectárea por año, a lo que se sumaría el 12 por ciento de la cosecha, que el propietario podría utilizar como quisiera.

En ambos casos, el contrato es inicialmente de 20 a 40 años.

Al principio, Dekel Oil les aseguró a los signatarios de los contratos de co-gestión que éstos tendrían pleno control sobre las plantaciones durante los períodos de mantenimiento y cosecha. Pero una vez firmado el contrato, la empresa ignoró su promesa y excluyó a los aldeanos del negocio. Contrariamente a lo prometido, no se informa a los aldeanos cuando la empresa prevé efectuar la cosecha. Tampoco reciben documentos que justifiquen el peso de las nueces de palma que cosechan. A veces, Dekel Oil recoge las nueces de palma de varios aldeanos al mismo tiempo. Al cargar las nueces en el mismo camión, y en ausencia de los aldeanos ya que no se les informó de la cosecha, éstos dependen completamente de las estimaciones de la empresa para saber qué proporción de la producción total corresponde a su propia producción. Los aldeanos también denuncian que Dekel Oil decide el monto que le pagará a cada aldeano sin proveerles de información adecuada o documentación con el peso de su cosecha.

Los pagos de la empresa a los aldeanos también se llevan a cabo con retrasos importantes. Los camiones de la empresa recogen las nueces de palma cada quince días. Según los contratos, Dekel Oil debería pagar cada mes o, en algunos casos, cada trimestre. Sin embargo los propietarios indican que a menudo tienen que esperar seis y a veces hasta doce meses para recibir sus pagos.

Las promesas falsas de Dekel Oil

Al igual que otras empresas de plantaciones de palma aceitera, Dekel Oil hizo hermosas promesas para lograr que los propietarios firmen contratos con ella. Dekel Oil prometió ayudar a los aldeanos dispuestos a firmar un contrato a obtener un crédito con el que podrían construirse una casa. Los aldeanos afirmaron, sin embargo, que las casas terminaron siendo más caras de lo planeado por la empresa y por tanto no pueden pagarle de vuelta.

Los representantes de la empresa también exageraron las cifras de producción al presentarle los contratos a los aldeanos. Al llegar a las aldeas con sus propuestas, los técnicos de Dekel Oil afirmaron que las plantaciones podrían producir aproximadamente entre 12 y 18 toneladas por hectárea por mes. Un informe reciente de la empresa (2) muestra que el rendimiento anual actual de los pequeños productores se sitúa entre 6 y 10 toneladas por hectárea por mes, es decir, una cifra bien inferior a las 12-18 toneladas que la empresa prometió inicialmente a los aldeanos por hectárea por mes.

La falsa promesa de “¡Usted se volverá muy rico!” con la que Dekel Oil llevó a los aldeanos a firmar los contratos se basó en estas expectativas exageradas de crecimiento. Dekel Oil prometió que los aldeanos ganarían 13 euros por hectárea cada mes, sin hacer ningún esfuerzo. El mensaje que acompañaba esta promesa era “¡Usted puede hacerse rico quedándose en su casa!”

Pero Dekel Oil no presentó la historia completa. La empresa jamás explicó cuánto había que gastar para establecer y mantener las plantaciones. Una vez firmados los contratos y plantadas las palmeras, la situación cambió. Los aldeanos recibieron muy poco dinero por haber cedido a Dekel Oil el control sobre sus tierras.

Algunos aldeanos no recibieron absolutamente nada. En la aldea de Ehia, subprefectura de Krinjabo, departamento de Aboisso, los aldeanos firmaron contratos con Dekel Oil por una superficie total de 86 hectáreas. La empresa ya estableció las plantaciones y cosecha las nueces de palma en 50 hectáreas, pero los aldeanos no han recibido ningún pago a cambio.

Frente a esta injusta situación y a los impactos sufridos por los aldeanos, un grupo de productores de palma aceitera que firmaron contratos con Dekel Oil decidió organizarse. Ellos crearon el “Colectivo de productores de palma aceitera”, cuyo fin es defender los derechos de sus miembros contra Dekel Oil. El Colectivo también comenzó a alertar a comunidades y aldeanos de otros lugares donde Dekel Oil está contactando agricultores para firmar contratos, acerca de lo que ocurre luego de la firma de estos contratos con la empresa.

Cláusulas contractuales peligrosas

Una de las principales preocupaciones que el Colectivo le plantea a los aldeanos y a las autoridades locales se refiere a algunas de las cláusulas incluidas en los contratos. El artículo 6 de los contratos de Dekel Oil estipula que seis meses antes del término del contrato (que dura entre 20 y 40 años), la empresa puede solicitar su renovación. Si el aldeano no se opone durante un corto período de tiempo luego de haber sido informado de la solicitud de la empresa, el contrato se renueva automáticamente.

Es importante recordar que la duración de los contratos es de entre 20 y 40 años y que algunos aldeanos no saben leer ni escribir. En ese contexto, una cláusula así puede permitir fácilmente a la empresa obtener el control de la plantación por mucho más tiempo que los 20 o 40 años previstos inicialmente por el contrato.

El Colectivo alerta a las comunidades a no firmar ningún contrato con la empresa en caso de que no estén en situación de comprender cabalmente las consecuencias. Las comunidades de Guitry, donde Dekel Oil afirma ya haber obtenido 24.000 hectáreas pero donde, que sepamos, no se ha firmado aún ningún contrato, deberían estar atentas a las falsas promesas que Dekel Oil les hará y a las desastrosas consecuencias tras la firma de dichos contratos.

Artículo basado en la presentación del Colectivo de productores de palma aceitera en Costa de Marfil durante una reunión internacional realizada en agosto de 2018.

- (1) <https://www.grain.org/fr/article/entries/5049-comment-nourrir-le-1>
- (2) Última presentación de Dekel Oil a los inversores, 18 de setiembre de 2018.
<http://dekeloil.com/ui/DKL%20Corporate%20Presentation%20-%202018.09.18%20.pdf>
- (3) <https://www.agenceecofin.com/palme/2308-22289-cote-d-ivoire-dekel-oil-lance-une-usine-de-transformation-d-huile-de-palme-a-ayenouan>

Ecuador: pueblos, comunidades y naturaleza frente a la palma aceitera



Jornadas de debate, reflexión y resistencia se llevaron a cabo en la ciudad de Quito, del 9 al 13 de octubre de 2018 en el marco del Encuentro “Pueblos, comunidades y naturaleza frente a la palma aceitera.” Este intercambio de saberes, es el primero en su tipo en Ecuador y convocó a líderes y lideresas de las provincias afectadas por la palma aceitera de las tres regiones del país.

En Ecuador la expansión de monocultivos industriales de palma aceitera es la principal causa de deforestación. Actualmente existen más de 300 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera a nivel nacional y se producen 577 mil toneladas anuales de aceite de palma, de las cuales el 61 por ciento se exporta.

Nuestro país no es ajeno a las consecuencias del modelo de acumulación agroindustrial. Existen numerosos casos de violencia, despojo y contaminación por la industria de la palma aceitera, con una marcada tendencia hacia la impunidad. Ante esto, las comunidades campesinas defensoras de la soberanía alimentaria dicen “basta” y desde diferentes espacios de la sociedad civil nace la necesidad de iniciar una serie de acciones para poder defender los derechos humanos y de la naturaleza atropellados por la industria de la palma.

Este esfuerzo colectivo de reflexión dio a luz a la RED de pueblos soberanos contra la palma aceitera, de quienes surgió la siguiente declaración:

“Declaración del primer Encuentro Ecuador: Pueblos, Comunidades y Naturaleza frente a la Palma Aceitera

En presencia de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, en este primer encuentro, los pueblos y comunidades del Ecuador hemos verificado un sinnúmero de vulneraciones de derechos asociados a la agroindustria de palma aceitera en el Ecuador.

Las palmicultoras imponen un sistema basado en la destrucción de los bosques y colocan en condiciones precarias a campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes.

La agroindustria de palma aceitera quiere campos para instalar sus grandes monocultivos basados en el uso intensivo de agrotóxicos, para despojar a los campesinos de la tierra, para apropiarse de todas las fuentes de agua o contaminarlas por su uso irresponsable y acaparador; todo, para obtener materias primas para productos comestibles ultra procesados de baja calidad, productos industriales y agro combustibles.

Entre las vulneraciones de derechos a la naturaleza, los pueblos y las comunidades denunciarnos en este primer encuentro sobre lo que acontece en Ecuador:

- La expansión de plantaciones de palma aceitera es la primera causa de deforestación de bosques y selvas primarias en Ecuador y otros países de Latinoamérica, al momento, el mega diverso Bosque del Chocó está a punto de desaparecer por esta actividad, violando los derechos de la naturaleza.
- Las plantaciones de palma aceitera han generado división comunitaria y fragmentación de territorios ancestrales indígenas, afroecuatorianos y campesinos, afectando a las lógicas de vida.
- En muchos casos, los monocultivos de palma aceitera se han desplegado en los territorios mediante mecanismos de desalojo de comunidades y la compraventa fraudulenta de la tierra, unido a la violencia, sicariato y asesinatos.
- Las plantaciones de palma aceitera promueven la concentración de la propiedad de la tierra, vinculada con el acaparamiento del agua, uso de semillas industriales, incentivos estatales, comercialización y mercado.

- La problemática afecta a más 400.000 Ha en Ecuador, donde no todas las áreas están incorporadas en las cifras oficiales.
- Esta expansión de la palma está amenazando la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación al reducir las áreas de cultivos diversificados campesinos.
- Las empresas palmicultoras han promocionado junto a la Corporación Financiera Nacional encadenamientos productivos que despojan a los campesinos de las tierras por mecanismos de endeudamiento.
- Donde llegan las plantaciones se destruye la economía campesina local, haciendo que la población se proletarice y pase a depender de los grandes capitales, que buscan la explotación y tienen altos índices de explotación laboral.
- La palma aceitera lleva asociado un fuerte uso de agrotóxicos para eliminar al resto de especies nativas que componen los bosques, así como tiene una fase de contaminación en la extracción del aceite, destruyendo las condiciones de vida de los ríos y de otros cuerpos de agua alrededor de las plantaciones.
- Esta destrucción de la vida acuática en los ríos y esteros lleva a la afectación de una importante fuente de sustento alimentario de las comunidades como es la pesca.
- La contaminación del agua provoca graves enfermedades de la piel, cáncer, abortos espontáneos y en general, el incremento de la mortalidad en las comunidades aledañas y que están aguas abajo de las plantaciones.
- El incremento en el consumo de este aceite de palma industrial, cargado de agrotóxicos, principalmente entre los sectores más empobrecidos, ha traído como consecuencia el aumento dramático de varias enfermedades.
- La destrucción ambiental que genera la palma aceitera se anuda a otras formas de despojo como son: la minería, el petróleo, etc.
- Las plantaciones de palma aceitera van unidas a la expansión de grandes infraestructuras viales como el corredor Manta-Manaos.
- El uso intensivo de agrotóxicos sumado a los impactos relacionados al monocultivo de palma aceitera, ha ahondado en la crisis de la Pudrición del Cogollo, con ello se ha desplegado un gran espiral tóxica que atenta a la salud ambiental, de los trabajadores y de las comunidades.
- Las autoridades que deben realizar el control de las plantaciones de palma aceitera como el Ministerio del Ambiente, el MAG o SENAGUA han descuidado sus funciones, y no han dado respuesta a la problemática.
- Denunciamos que no hay acceso a la justicia, pues los grandes grupos empresariales de la palma sobornan al mecanismo judicial.

- Denunciamos que la RSPO, con su certificación dada a las empresas palmicultoras, legitima la expansión de los monocultivos de palma, la violación de derechos de las comunidades locales y la destrucción de ecosistemas.
- Frente a ello, los pueblos originarios y campesinos quienes reivindicamos nuestra relación con la naturaleza, tenemos el deber y el derecho colectivo e histórico de recuperar, fortalecer y mantener el cuidado y la protección de nuestras formas de vida, de nuestros saberes y derecho propio, nuestra autonomía, nuestra agricultura tradicional campesina y nuestra soberanía alimentaria.

Ante esta situación de vulneración de derechos, las comunidades y pueblos afectados, nos agrupamos en la **RED de pueblos soberanos contra la palma aceitera**, y planteamos soluciones que deben ser de obligado cumplimiento para el Estado y la sociedad ecuatoriana:

- Es vital recuperar y proteger los ríos, para que se pueda beber el agua de forma segura, se recupere la fauna y flora de la que dependen las comunidades para la vida, para la recreación, para las actividades cotidianas y por su simbolismo cultural.
- Las empresas aceiteras deben asumir sus responsabilidades económicas y sociales por los daños causados, y debe emprenderse un proceso de reparación integral a la población y la restauración de la naturaleza.
- La justicia debe ser independiente de las presiones de las grandes empresas para poder aplicar la ley y los derechos de las comunidades.
- Debe ser una política de Estado asegurar el trabajo y el acceso a la tierra en el Ecuador, para detener que las personas más jóvenes sigan emigrando a las ciudades por falta de alternativas en el campo.
- Demandamos que se priorice el apoyo a la agricultura campesina de pequeña escala, la cual alimenta a nuestros pueblos, ya que es la encargada de la producción destinada al consumo local en contradicción con los monocultivos centrados en la exportación.
- Hay una oportunidad de transitar los territorios de palma aceitera hacia sistemas de producción diversificada, con más rendimientos y menos agresivos con el ambiente, como el cacao nacional orgánico, para lo que es necesario el apoyo al pequeño campesinado.
- Las autoridades actuales deben revertir la situación; estas resoluciones serán entregadas al Presidente de la República, Ministro de Agricultura y al Ministro del Ambiente, para que salgan de su inacción y de la promoción de la palma aceitera.
- Exigimos que el Ministerio del Ambiente realice los controles pertinentes para evitar la sustitución de bosques nativos por palma, y la contaminación generada por las plantaciones y extractoras de aceite.
- Exigimos que la CFN, el BNF y otras instituciones de crédito coordine con el Ministerio del Ambiente y MAGAP para NO otorgar créditos a proyectos que causen deforestación, conflictos sociales ni violaciones de derechos.

- Mientras se sigan violando nuestros derechos como comunidades, proclamamos el derecho a la resistencia de los pueblos contra la entrada de las palmicultoras aceiteras a los territorios comunales y campesinos.
- Las organizaciones acá reunidas estaremos monitoreando las tierras bajo palma aceitera para exigir un verdadero conteo y unas estadísticas oficiales ajustadas a la realidad.
- Nos comprometemos a darle continuidad a este encuentro a través del fortalecimiento de nuestras organizaciones y redes, mediante el desarrollo de espacios de discusión y acciones en contra de la expansión de la palmicultura, así como la intensificación de nuestras resistencias y luchas desde el nivel local, nacional e internacional. Hoy nos articulamos como *red de organizaciones sociales y campesinas frente a la palmicultura*.
- Los hechos acá relatados de violaciones de derechos, así como estas propuestas buscarán también la justicia internacional y la solidaridad de las organizaciones sociales de todo el mundo.

Quito, 11 de octubre de 2018”

Alex Naranjo, Campaña Soberanía Alimentaria, Acción Ecológica, verdevegetal@yahoo.com

Gabón: las plantaciones industriales de palma aceitera de OLAM dejan a la comunidad de Sanga sin acceso a agua potable



Sanga, Gabón. Foto: WRM

La expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera perjudicó de manera especial a la aldea de Sanga, en el sur de Gabón. La principal fuente de agua de la comunidad se contaminó tanto que ahora el agua no es segura para beber y no es

adecuada para otros usos diarios. Sin embargo, la contaminación del agua es solo uno de los impactos causados por las plantaciones gestionadas por la empresa OLAM, con sede en Singapur y de propiedad conjunta del gobierno de Gabón.

En septiembre de 2018, 35 mujeres y hombres de comunidades afectadas por las plantaciones industriales de palma aceitera administradas por la empresa de alimentos OLAM, con sede en Singapur, se reunieron en Mouila, en el sur de Gabón. Varias organizaciones y activistas nacionales e internacionales también participaron de la reunión en la que los aldeanos compartieron las experiencias de sus comunidades con respecto a las plantaciones de palma aceitera a gran escala de OLAM. Analizaron las estrategias que utiliza la empresa para promover las plantaciones industriales de palma aceitera y obtener acceso a tierras comunitarias. También discutieron el papel fundamental de las mujeres en la resistencia a las plantaciones industriales así como las acciones para fortalecer su resistencia frente a la estrategia de expansión de la empresa, ya que consideran que esta resistencia es clave para defender los medios de vida y sustento de la comunidad, especialmente para las generaciones futuras.

Contaminación del agua en Sanga

Parte de la agenda del taller fue una visita de campo a las aldeas de Mbadi, Sanga y Mounigou; tres aldeas que están gravemente afectadas por las plantaciones industriales de OLAM. La situación del pueblo de Sanga es particularmente crítica. Esta aldea fue construida recientemente en terrenos que la comunidad ha usado durante generaciones, y se estableció con el objetivo de detener el avance incontrolado de las plantaciones de palma aceitera a gran escala de OLAM en la zona. A pesar de la resistencia, los monocultivos avanzaron hasta llegar muy cerca de las viviendas -a unos 200 metros-, prácticamente cercandando la aldea. Es así que los pesticidas tóxicos que se usan de manera intensiva en estas plantaciones se aplican peligrosamente cerca de la aldea.

Según Dieudonné Moukétou-Tarazewicz, graduado en Geografía Física y fundador de la ONG local *Muyissi Environnement*: “los monocultivos favorecen el cultivo de una sola especie sobre otras, lo que conduce a un desequilibrio ambiental entre las poblaciones de plantas e insectos. Algunas especies desaparecen y aparecen plagas más potentes, porque el uso prolongado de plaguicidas genera resistencia en los insectos, lo cual a su vez requiere mayores dosis de plaguicidas. Un factor agravante es que estos compuestos son bioacumulables, es decir, que se acumulan gradualmente en la cadena alimentaria y no se eliminan ni se disuelven con el tiempo. No son biodegradables; en otras palabras, son resistentes a la degradación biológica, además de ser resistentes a la degradación química y fotolítica, es decir, por la luz. Por lo tanto, incluso en bajas concentraciones, afectan seriamente el equilibrio del ecosistema.”

Sanga enfrenta una situación muy grave ahora porque la principal fuente de agua de la aldea, ubicada a un lado de la carretera a unos 50 metros de las viviendas, se ha contaminado como consecuencia de la expansión de las plantaciones. En respuesta a las quejas de los aldeanos, OLAM construyó otro pozo. Como suele ocurrir con ese tipo de pozos y perforaciones hechos por las empresas de plantaciones, éste tampoco tuvo un mantenimiento correcto por parte de la compañía, y además está ubicado muy cerca de la fuente de agua contaminada y es alimentado por la misma napa subterránea contaminada, provocando que ahora la comunidad ya no pueda usar esa fuente de agua.

Además del riesgo antes mencionado de contaminación por plaguicidas, las fuentes de agua ubicadas cerca de las plantaciones de monocultivos corren el riesgo de sufrir otra contaminación: la de los fertilizantes químicos. El Sr. Moukétou-Tarazewicz explica: “Cuando se usan en exceso y sin planificación, los fertilizantes también pueden contaminar las aguas superficiales de los ríos, lagos y pozos, causando daños al ecosistema. De hecho, en general, estos compuestos son solubles en agua”. Añade que estos compuestos, una vez que ingresan al agua, también se convierten en nutrientes para las algas: “Con la escorrentía del agua de lluvia, estos productos se depositan en ríos, lagos y pozos, lo que provoca una proliferación de algas en una proporción superior a la normal. Esto dificulta el ingreso de luz y la oxigenación del agua. La situación empeora cuando las algas mueren, ya que liberan una gran cantidad de materia que es degradada por microorganismos aeróbicos.”

La principal fuente de agua de la que dependen los habitantes de Sanga muestra este fenómeno descrito por Moukétou-Tarazewicz. Durante la visita de campo, él tomó muestras de agua y desde entonces ha estado realizando pruebas: “El análisis preliminar de parámetros tales como los iones de hidrógeno y el oxígeno disuelto, realizado *in situ*, reveló que el pH, la turbidez y los sólidos disueltos estaban dentro del rango de resolución, lo cual no es el caso con el oxígeno disuelto (OD), que registra un alto contenido de materia orgánica en el agua. Para los otros parámetros en cuestión se necesitan análisis adicionales de las muestras tomadas para evaluar si se ha alcanzado el límite autorizado para aguas de Clase II (OMS, 2004), lo cual puede tener efectos adversos en la salud humana.”

Parámetros analizados	Resultados P1 / P2	Normas (WHO)
Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	P1=0558 / P2=0690	2000
Oxígeno disuelto (%)	P1=36.9 / P2=127.4	\geq
pH ()	P1=7.16 / P2=8.72	6,5 – 8,5
Temperatura (T °)	P1=26.5 / P2=27.18	-
Turbidez (NTU)	P1=032.9 / P2=008.8	<
Salinidad (mg/l)	P1=0558 / P2=0690	1000
TDS	P1=0361 / P2=0449	-

Resultados del análisis preliminar de la sonda multiparamétrica

El análisis preliminar muestra claramente que el agua no es segura para consumo. Los resultados explican por qué las personas se enfermaron por beber de esta agua contaminada. Sin embargo, a pesar del riesgo para la salud, es la única fuente de agua disponible ya que no hay ninguna otra cerca. Los aldeanos que transmitieron los testimonios de personas que se habían enfermado, contaron también que algunos empleados de OLAM se negaron a llevar en sus autos a las personas que se habían enfermado y que necesitaban llegar al centro de salud más cercano.

Carta abierta a OLAM

Al escuchar los testimonios de los aldeanos, los participantes de la reunión decidieron escribir una carta abierta a OLAM - *pueden acceder a la carta en francés [aquí](#)* -. En la carta, los participantes exigen que OLAM resuelva con urgencia el problema del agua en Sanga. También exigen que OLAM mejore el trato que da a sus trabajadores así como las malas condiciones de trabajo en general. Los trabajadores hablaron sobre la falta de equipos de protección que podrían reducir el impacto en su salud cuando aplican plaguicidas. También denunciaron los bajos salarios que reciben, que además están condicionados a alcanzar

cuotas diarias en sus tareas extremadamente exigentes. La carta también exige a OLAM que aclare su intención de crear un parque de ecoturismo, según informa la comunidad de Mbadi, la cual se opone a este proyecto porque en esa zona de bosque encuentran su forma de vida y sustento.

Comunidades que fortalecen su unidad

El taller realizado en Mouila mostró los múltiples impactos que las plantaciones industriales de palma aceitera tienen en las comunidades. El taller también reveló la estrategia de OLAM para impedir la creación de espacios donde las comunidades puedan expresar y discutir colectivamente estos impactos y otros temas de su interés.

Parte de esta estrategia son los comités comunitarios que OLAM está creando en cada aldea. El funcionamiento de estos comités no tiene base legal alguna. Los comités son el lugar para el llamado “diálogo” entre las comunidades y OLAM. Pero los temas que se pueden abordar en este “diálogo” se limitan a los contenidos de los “contratos sociales” que la empresa firmó con cada comunidad. Estos contratos consisten esencialmente en una lista de “beneficios” que la compañía acordó que proporcionaría y/u otorgaría a las comunidades. Algunos ejemplos son los paneles solares para iluminar una única lámpara afuera de cada casa comunitaria; un puesto de salud y/o una bomba de agua; un lugar de deportes; alojamiento para profesores que enseñan en la escuela primaria local.

Los aldeanos expresaron su malestar porque los comités están dominados por OLAM y representantes estatales, y no están funcionando realmente como un espacio para un diálogo verdadero; los contratos que se supone pueden discutir tienen una implementación vaga y no contienen plazos, y tampoco se explica cómo se efectivizará lo prometido o cómo se mantendrán las estructuras. Lo que es más, OLAM decretó desde el principio que los comités comunitarios no tienen el mandato de discutir los temas que más preocupan a las comunidades: la expansión en curso de las plantaciones de OLAM, así como otros planes de la empresa para controlar más tierras - como el proyecto de creación de nuevas áreas protegidas y sitios para el ecoturismo. Sin ningún “diálogo”, y mucho menos el consentimiento de las comunidades sobre la expansión del control de OLAM sobre las tierras comunitarias, la compañía continúa tomando las tierras y los bosques de los que dependen las comunidades.

OLAM solicitó ser invitado a las recientes reuniones comunitarias en Mouilla. En lugar de utilizar su presencia cotidiana en la región para buscar intercambios significativos con los aldeanos, la empresa intentó de forma descarada interferir con las comunidades que ejercen su derecho a reunirse y discutir libremente los problemas que sufren a raíz de las actividades de OLAM.

Los aldeanos desafiaron los descarados intentos de la empresa, se reunieron y decidieron que la mejor respuesta a las tácticas divisorias de OLAM es fortalecer su propia unidad. Formularon varias ideas y planes para fortalecer su organización y resistencia al avance de las plantaciones. También discutieron formas de mejorar sus medios de vida y sustento, siempre a partir del principio de diversificación de la economía.

Los aldeanos que participaron en la reunión dejaron en claro que el monocultivo no es el camino a seguir para la región de Mouila. El resultado que han visto es que una sola empresa ha aumentado su control sobre la tierra y los bosques y se lleva los beneficios,

mientras que las comunidades sufren el perjuicio de quedar cercadas por plantaciones industriales de palma aceitera. Lo que se necesita, en cambio, es que se respete el derecho fundamental de las comunidades a ganarse la vida y decidir sobre el uso de la tierra en la que han vivido durante generaciones, ahora y en el futuro.

El secretariado del WRM y Muyissi Environnement

El colapso de la represa Xe Piann-Xe Namnoy en la RDP de Laos: ¿aprenderá la región del Mekong con lo sucedido?



Laos. Foto: Reuters

Con casi el 40 por ciento del volumen total del río Mekong en la República Democrática Popular de Laos, el gobierno ha decidido hacer del país “la batería de Asia”. Para ello ha construido una serie de grandes represas hidroeléctricas a lo largo del río Mekong, con el objetivo de exportar la energía excedente a los países vecinos. El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo son influyentes actores que desde el principio han respaldado las políticas neoliberales para la construcción de represas en Laos.

Cada vez más las represas bloquean y desvían el flujo y la interconexión tanto de espacios y ciclos ecológicos como de antiguas economías y patrimonios culturales locales. Y en muchos casos el daño generado ya es irreparable.

Actualmente hay 46 centrales hidroeléctricas en funcionamiento en Laos y más de 50 centrales en construcción en todo el país, cuya finalización se prevé para 2020. El plan es exportar alrededor del 85 por ciento de la producción de energía del país, principalmente a Tailandia, Camboya y Vietnam. (1)

No obstante, este “desarrollo” de la energía hidráulica se enfrenta a crecientes críticas. El río no es solo una cuestión de los laosianos, sino también de todos los habitantes de los países

vecinos, que comparten sus aguas y corrientes. A escala regional, el embalse del Mekong y sus ríos tributarios reducirá significativamente la producción pesquera artesanal, vital para el sustento y las formas de vida de toda la cuenca del Bajo Mekong. A eso se agrega que los cambios en las corrientes hídricas seguramente aumentarán las inundaciones, interrumpirán los sistemas agroecológicos que dependen de los ciclos periódicos de inundaciones, e impedirán la acumulación de sedimentos que proporcionan nutrientes para la producción agrícola en Laos y los países río abajo. Además, se corre el riesgo de que las represas puedan llegar a reducir el volumen de agua que fluye desde el Mekong superior y así causar pérdidas significativas a los agricultores que se dedican a la agricultura en el Delta del Mekong en Vietnam. Estos proyectos pueden causar serias disputas sobre el agua entre Laos y los países del bajo Mekong. (2)

Una reseña de los impactos ambientales y sociales provocados por los proyectos de represas en Laos reveló cómo estos proyectos causaron la emigración de miles de personas que perdieron sus medios de vida y culturas y luego se vieron obligadas a ganarse la vida en nuevos oficios que les resultaban completamente extraños. (3) Además de esto, el reciente colapso del dique de la central hidroeléctrica *Xe Piann-Xe Nam Noy* en el sur de Laos, que inundó numerosas aldeas y generó un elevado número de muertos, acentuó los muchos otros riesgos de tales proyectos.

¿Quién está detrás de la represa Xe Piann-Xe Nam Noy?

Ubicada en el sur de Laos, en la meseta de Bolaven, la represa hidroeléctrica *Xe Piann-Xe Namnoy* fue construida en los ríos que confluyen en el Sekong, uno de los mayores afluentes del río Mekong. El proyecto se remonta a junio de 1993, cuando los gobiernos de Tailandia y Laos firmaron un memorando de entendimiento sobre el comercio de 1,5 millones de kilovatios (kW) de electricidad. Al año siguiente, Dong-A E&C, una empresa coreana, firmó un contrato con el gobierno de Laos para instalar una planta hidroeléctrica, con una inversión total de US\$ 498,41 millones de dólares.

El Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea del Sur proporcionó al Fondo de Cooperación y Desarrollo Económico parte de los recursos financieros necesarios para construir la represa. Pero el Grupo Dong-A quebró en mayo de 1998, poco después del estallido de la crisis financiera asiática, y su subsidiaria, Dong-A E&C, también se declaró en bancarrota en noviembre de 2000. Esto hizo que el proyecto de construcción de la represa se detuviera de manera indefinida.

El proyecto resurgió cuando otra compañía coreana, SK Engineering & Construction, y Korean Western Power Company (KWPC) firmaron en 2006 un memorando de entendimiento con el gobierno de Laos para reanudar el proyecto. En 2011, el gobierno de Laos solicitó ayuda financiera al Fondo de Cooperación y Desarrollo Económico, de Corea. Poco después, el Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea del Sur y su contraparte laosiana firmaron un acuerdo. (4)

Además de la inversión de Corea del Sur, el banco tailandés *Ayudhya Public Company Bank* también cofinanció el proyecto. El banco se encuentra actualmente bajo el paraguas del grupo financiero japonés Mitsubishi UFJ (MUFG). Además, el Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno (GPIF, por su sigla en inglés) posee acciones por valor de alrededor de mil millones y medio de yenes (aproximadamente 14 millones de dólares estadounidenses) del Banco Krungthai, otro co-financiadore tailandés de la empresa

conjunta, así como créditos por un valor de más de seis mil millones de yenes (aproximadamente 59 millones de dólares estadounidenses) del Banco de Exportación e Importación de Corea, que financia la empresa estatal Lao Holding (LHSE, por su sigla en inglés), que creó la empresa conjunta. (5)

La propaganda del consorcio era que la represa hidroeléctrica, capaz de generar 410 MW de electricidad después de su finalización, produciría atractivas ganancias en los próximos 27 años al exportar su producto a la compañía de energía tailandesa *Ratchaburi Electricity Generating Holding*. Sin embargo, lo que evitó mencionar fue que se obligó a los indígenas a abandonar nuevamente sus formas de vida y sustento, y tampoco hizo referencia a los numerosos riesgos sociales y ambientales que conlleva dicha represa.

Los impactos silenciados

Los indígenas Nyaheun, que poblaban la zona que fue inundada por el proyecto de la represa Xe Pian-Xe Nam Noy, solían ser autosuficientes. De sus tierras obtenían suficiente arroz mientras que el río y los bosques cercanos también les proporcionaban alimentos y agua.

Sin embargo, poco después de haberse firmado el contrato del proyecto de la represa, se obligó a los Nyaheun a emigrar a la región montañosa. Tuvieron que dejar atrás la pesca, que era su modo de subsistencia, y se vieron obligados a cosechar café. Pero la región montañosa era el hogar de otro grupo étnico nativo conocido como los Jhru, con los cuales los Nyaheun mantuvieron históricamente un vínculo de hostilidad. Por otra parte, la emigración de los Nyaheun a la zona de los Jhru significó una disminución del agua potable disponible y también impactó en la fertilidad de la tierra, lo que resultó en una reducción de las cosechas y la necesidad de usar fertilizantes. La migración ha comprometido drásticamente la calidad de vida de ambos grupos. (6)

Cuando hace dos décadas el proyecto de Dong-A E&C fracasó, los Nyaheun comenzaron a regresar a sus pueblos de origen. Pero cuando se reanudó la construcción de la represa, nuevamente los obligaron a irse.

Además, las aldeas camboyanas en torno al Mekong inferior, por ejemplo, al momento de escribir el informe ya habían experimentado cambios abruptos en los volúmenes de agua, disminuciones aceleradas y cambios en las cantidades y especies de peces disponibles para la pesca, y un cambio drástico en su forma de vida (que incluye tener que arreglar necesariamente las estructuras de sus casas en respuesta a los repentinos cambios de los volúmenes de agua). Los aldeanos han experimentado todos esos cambios tan acelerados en la última década desde que se inició la construcción de la represa. Aún más preocupante es el hecho de que estos cambios ambientales se han traducido en un creciente detrimento de la soberanía alimentaria.

“Un desastre, pero no un desastre natural” (7)

Mientras la estaban construyendo, la parte superior de una represa subsidiaria instalada en uno de los embalses del proyecto hidroeléctrico *Xe-Pian Xe-Namnoy* se derrumbó, liberando una gran cantidad de agua. Como resultado, seis aldeas situadas aguas abajo quedaron sepultadas, mientras que otras 13 aldeas también se vieron afectadas por graves inundaciones. Debido a que la construcción de esta presa se encontraba bajo un afluente

transfronterizo del río Mekong, el gran flujo de agua también llegó a Camboya, causando perjuicios a las comunidades de frontera en la provincia de Stung Treng. (8). La tragedia causó la muerte de más de 30 personas, cientos de personas desaparecidas e innumerables pérdidas de hogares y medios de vida.

Después del colapso de la represa, el gobierno de Laos anunció la suspensión de todas las nuevas represas propuestas, en espera de una revisión de todas las instalaciones hidroeléctricas existentes. Sin embargo, el día después de este anuncio inició el proceso de consulta previa de un nuevo proyecto en el Mekong, altamente cuestionado: la represa de Pak Lay. (9)

No es nada nuevo que las mega represas sean cuestionadas y provoquen desastres ambientales y sociales. Pero entonces, ¿por qué los planes de construcción de represas en el río Mekong y en otros lugares continúan a pesar de los urgentes reclamos de evitar sus impactos tan perjudiciales?

Artículo basado en información obtenida de:

- (1) Mekong Eye, Laos expects to have 100 hydropower plants by 2020, julio de 2017, <https://www.mekongeye.com/2017/07/12/laos-expects-to-have-100-hydropower-plants-by-2020/>
- (2) Green W. and Baird, I (2016) Capitalizing on Compensation: Hydropower resettlement and the commodification and de-commodification of nature-society relations in Southern Laos, Annals of the American Association of Geographers.
- (3) International Rivers, Power Surge: The Impacts of Rapid Dam Development in Laos, 2008, <https://www.internationalrivers.org/resources/power-surge-the-impacts-of-rapid-dam-development-in-laos-3964>
- (4) South Korean Presence on the Mekong Hydropower Development Market: Current Status and Issues, LEE Kangjun (Director, Energy and Climate Policy Institute)
- (5) Mekong Watch, Grave damage caused by dam collapse in southern Laos, julio de 2018, <https://savethemekong.net/2018/08/06/mekong-watch-statement-grave-damage-caused-by-dam-collapse/>
- (6) Idem (4)
- (7) Mekong Watch statement, <https://www.internationalrivers.org/resources/save-the-mekong-statement-on-the-collapse-of-the-xe-pian-xe-nam-noy-hydropower-project>
- (8) Idem (5)
- (9) New Delhi Times, Water Experts Question World Bank's role in Laos Dam, octubre de 2018, https://www.newdelhitimes.com/water-experts-question-world-banks-role-in-laos-dam/?fbclid=IwAR1sgGgKkP_kAyRrEtXeVJKi_8F5kGuuPyI7qA9CX5I_fZ9LiIoFsO5WE

ALERTAS DE ACCIÓN

Nuevo paso hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos

Se realizó en Ginebra (15 al 19 de Octubre) la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y de la naturaleza son inherentes a las operaciones de las empresas transnacionales. Sin embargo, no existe a nivel internacional un instrumento vinculante que les obligue a respetar los derechos humanos. Por esta razón se creó este Grupo de Trabajo, con el objetivo de desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales (ETNs) y otras empresas con respecto a la violación de los Derechos Humanos.

La Campaña Global para reclamar la soberanía de los pueblos, dismantelar el poder de las transnacionales y poner fin a su impunidad (Campaña Global), red internacional integrada por cientos de organizaciones y movimientos sociales, participó activamente de esta cuarta sesión. La Campaña Global se ha comprometido desde los inicios de este proceso, no solo con la creación del mandato del Grupo de Trabajo para que éste elabore un tratado vinculante con respecto a las ETNs y su seguimiento, sino además con la elaboración de un proyecto de Tratado que fuera presentado el año pasado a este grupo como forma de contribuir a la construcción del Tratado definitivo sobre ETNs y Derechos Humanos a nivel de la Organización de las Naciones Unidas.

Ver <https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es>

Compartimos aquí la Declaración de la Campaña Global para la clausura de esta cuarta sesión del Grupo de Trabajo, donde destaca algunos elementos claves para poder elaborar un instrumento eficaz y útil, que permita a las personas y comunidades afectadas acceder a la justicia: <https://www.stopcorporateimpunity.org/declaracion-de-la-campana-global-para-la-clausura-de-la-cuarta-sesion-del-oeiwig-sobre-empresas-transnacionales-y-otras-empresas-con-respecto-a-los-derechos-humanos/?lang=es>

Justicia ordena a la empresa chilena Arauco a devolver tierra a comunidad mapuche

El 28 de setiembre la justicia chilena falló a favor de la comunidad Ignacio Huilipán, ubicada en la Comuna de Contulmo, región del Bio Bio, obligando a la empresa Forestal Arauco (ex Forestal Celco SA) a restituírle 97 hectáreas de tierra usurpadas décadas atrás para la expansión de sus monocultivos de árboles. El tribunal acusó a Arauco de haber intentado acreditarse la propiedad del terreno de mala fe y reconoció el “Título de Merced” de 1904 que reclamaba la comunidad. Estos títulos fueron entregados por el estado a las comunidades mapuches entre los años 1884 y 1929.

Ver: <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/10/02/fallo-historico-justicia-restituye-a-comunidad-indigena-tierras-de-forestal-del-grupo-angelini.shtml>

Forestal Arauco no se pronunció en cuanto a la usurpación de tierras, tan solo presentó un recurso apelando la orden que decreta el pago del costo del juicio y la consiguiente demanda de indemnización por los impactos provocados en la comunidad durante las últimas décadas. Ver: <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107490>

Carta del Colectivo de Mujeres afectadas por el monocultivo de palma aceitera de Gabón a la FAO

En el marco del 21 de septiembre, día internacional de la lucha contra los monocultivos de árboles, las mujeres afectadas por las plantaciones de palma aceitera de OLAM, durante una reunión en la aldea de Fera en Gabón, decidieron enviar una carta a la FAO para denunciar los impactos que están sufriendo.

El Colectivo de Mujeres afectadas por el monocultivo de palma aceitera alerta sobre los impactos de tales plantaciones en la seguridad alimentaria y la producción de alimentos. Las mujeres critican la política de la FAO de apoyo a la expansión de los monocultivos industriales de palma aceitera, ya que afecta gravemente la seguridad alimentaria y, por lo tanto, está en clara contradicción con el mandato de la FAO de combatir el hambre en el mundo. Además, las mujeres denuncian en su carta que la destrucción del bosque causada por las plantaciones industriales de palma aceitera afecta a las mujeres y en particular a sus conocimientos tradicionales sobre los múltiples usos de los bosques.

Pueden leer la carta completa en: <https://wrm.org.uy/fr/files/2018/10/Lettre-des-femmes-%C3%A0-la-FAO.pdf>

Apoyo a la declaración: “La RSPO no elimina la violencia y la destrucción del sector del aceite de palma industrial”

Amigos de la Tierra Internacional y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales lanzaron una declaración internacional de denuncia de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible. La Declaración que invitamos a las organizaciones a apoyar firmándola, denuncia a la RSPO como una herramienta basada en el mercado, utilizada por la industria de la palma aceitera para seguir expandiendo y maquillando de verde la destrucción y las violaciones a los derechos humanos que realizan las empresas en el sector de la palma aceitera.

La RSPO tendrá su conferencia anual en Malasia del 12 al 15 de noviembre. Invitamos a las organizaciones de todo el mundo a firmar la declaración antes del 9 de noviembre de 2018.

Si su organización desea apoyar, por favor firme aquí: <https://wrm.org.uy/es/otra-informacion-relevante/apoye-la-declaracion-rspo-14-anos-de-fracaso-en-eliminar-la-violencia-y-la-destruccion-del-sector-del-aceite-de-palma-industrial/>

RECOMENDADOS

Un nuevo documental: “La explotación de los bosques primarios: ¿puede el eco-etiquetado frenar la industria forestal?”

Un nuevo documental, producido por el canal europeo Arte, muestra cómo funciona realmente la certificación de bosques y plantaciones industriales de árboles por parte del FSC y si protege los bosques y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Una vez más, los resultados son devastadores para FSC. El documental concluye que en los últimos 25 años de su existencia, la certificación del FSC no ha logrado frenar la industria forestal y concluye que “solo podemos salvar los bosques tropicales con legislación, no con sellos verdes”.

FSC Watch, la página web que brinda información sobre los problemas de certificación FSC, ha producido nueva información sobre los casos destacados en la película, artículos que recomendamos. El documental, disponible en francés, español y alemán, junto a artículos sobre este están disponibles aquí: <https://fsc-watch.com/2018/10/18/new-documentary-slams-fsc-the-eco-label-could-not-slow-down-the-forest-industry/>

Más cerca de una Declaración de las Naciones Unidas en defensa de los derechos de las y los campesinxs

En Setiembre pasado y luego de más de 17 años de una ardua lucha liderada por la Via Campesina y con el apoyo de varias organizaciones, los y las campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales se encuentran a un solo paso de lograr una Declaración de las Naciones Unidas que podría defender y proteger sus derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad, los mercados locales y mucho más. Los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobaron una resolución relativa a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Se espera ahora que en Noviembre de este año, la Declaración pueda ser votada y aprobada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Una vez aprobada, la Declaración de las Naciones Unidas se convertirá en una poderosa herramienta para que los y las campesinas y las personas que trabajan en las zonas rurales puedan reclamar justicia y políticas nacionales favorables en materia de alimentación, agricultura, semillas y tierras, teniendo en cuenta los intereses de millones de productores de alimentos rurales, sin distinción de género o edad.

Los invitamos a leer más en: <https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-el-consejo-de-derechos-humanos-de-las-naciones-unidas-aprueba-la-resolucion-relativa-a-la-declaracion-sobre-los-derechos-de-las-y-los-campesinxs-en-ginebra/>

Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos utilizando la siguiente fuente: **Boletín 240 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM): “Territorios amenazados: resistiendo la embestida extractivista”** (<https://wrm.org.uy/es/>)

Suscríbete al Boletín del WRM: <http://eepurl.com/8mVnL>

El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos en la defensa de sus territorios y bosques. La suscripción es gratuita.

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editor en jefe: Winfridus Overbeek

Redactora responsable: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Elizabeth Díaz, Lucía Guadagno, Jutta Kill, Carolina Motoki y Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Avenida General María Paz 1615 oficina 3.

CP 11400, Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 2605 6943

wrm@wrm.org.uy - www.wrm.org.uy/es/